

Art. 61. El Gobernador dirige los litigios seguidos en nombre de la provincia.
Para entablar demandas ordinarias de mayor cuantía es necesario el acuerdo de la Diputación provincial; para todos los demás casos es suficiente el del Gobernador, oída la Comisión.

CAPÍTULO VII.

Empleados y agentes de la Administración provincial.

Art. 62. Las dependencias de la Diputación provincial se componen:

- 1.º — De la Secretaría.
- 2.º — De la Contaduría.
- 3.º — De la Depositaria.

Al frente de cada una de estas sesiones habrá un Jefe, bajo cuyas órdenes servirán los empleados necesarios. El nombramiento y separación de estos Jefes corresponde al Gobernador á propuesta de la Diputación provincial.

Art. 63. La Diputación nombra y separa á sus demás empleados.

Art. 64. La plantilla, el sueldo de todos los empleados de dichas dependencias y el Reglamento de su servicio interior, se acordarán por la Diputación sometiéndolos á la aprobación del Gobernador General.

Art. 65. La propuesta ó nombramiento de los referidos funcionarios se hará previo concurso, entre las personas que reúnan los requisitos que determine un Reglamento especial.

Art. 66. El Gobernador, sin propuesta de la Diputación, podrá también separar ó suspender á los Secretarios, Contadores y Depositarios por causa grave justificada en expediente.

La suspensión no podrá exceder de cuatro meses.

Art. 67. Contra la providencia de separación ó suspensión podrán los interesados acudir en queja al Ministro de Ultramar, por conducto del Gobernador, que por el correo más próximo, dará curso á la alzada con el expediente y su informe.

El Ministro de Ultramar resolverá, sin pérdida de tiempo y sin ulterior recurso, oyendo al Consejo de Estado.

Art. 68. La Diputación provincial, previa aprobación del Gobernador General, puede dar encargo á cualquiera de sus vocales ó dependientes para girar visitas de inspección á los Ayuntamientos, con el fin de enterarse del estado de sus servicios y archivos.

En estas visitas no se dictará providencia alguna sobre los asuntos municipales y se limitarán los delegados á informes á la Diputación, la cual adoptará en su vista las disposiciones que procedan conforme á esta Ley.

Art. 69. El Secretario tiene á su cargo la preparación y tramitación de los asuntos de que hayan de conocer la Comisión y Diputación, la redacción de sus actas y acuerdos, la correspondencia y el cuidado y conservación de su archivo. Firma con el Presidente los dictámenes y resoluciones de la Comisión y Diputación, autorizándolos con el sello de la provincia, cuya guarda le estará encomendada, y cuidar de que sean notificados á quien correspondan.

Art. 70. El Depositario es el único encargado de la custodia de los fondos provinciales y prestará como tal la fianza que la Diputación exige.

CAPÍTULO VIII.

Presupuestos y cuentas provinciales.

Art. 71. La Diputación provincial sujetará la contabilidad de sus fondos á las disposiciones del Decreto de 12 de Setiembre é Instrucción de 4 de Octubre de 1870 dictadas para el régimen de la Administración económica y contabilidad de Ultramar y las demás vigentes sobre servicios especiales.

Art. 72. La Diputación provincial formará, discutirá y aprobará sus presupuestos ordinario y adicional dentro del segundo mes del año económico y los remitirá al Gobernador General para el doble efecto de corregir las extralimitaciones legales si las hubiere é impedir que se perjudiquen los intereses generales de los pueblos.

Art. 73. De los acuerdos del Gobernador podrá alzarse la Diputación elevando el recurso al mismo Gobernador para que lo remita al Ministro de Ultramar, que resolverá sin pérdida de tiempo oyendo al Consejo de Estado.

Si quince días antes de empezar el ejercicio del año económico no hubiere resolución del Ministro de Ultramar registrarán los presupuestos aprobados por la Diputación con las correcciones introducidas por el Gobernador General.

Art. 74. La Ordenación general de pagos corresponde al Presidente de la Diputación ó á quien haga sus veces mientras se halla reunida y cuando no lo esté corresponderá al Vice-presidente de la Comisión provincial.

Art. 75. La distribución mensual de fondos corresponderá á la Diputación ó si no estuviere reunida á la Comisión asociada de los Diputados que se hallaren en la Capital.

Art. 76. El presupuesto provincial contendrá precisamente las partidas necesarias según los recursos de la provincia para atender á los servicios siguientes:

- 1.º — Personal y material de sus oficinas y

dependencias, establecimientos provinciales de Beneficencia, Sanidad é Instrucción.

2.º — Conservación y administración de las fincas y edificios de la provincia.

3.º — Construcción, conservación y administración de sus obras públicas.

4.º — Inspección de los montes municipales.

5.º — Fomento y conservación del arbolado.

6.º — Suscripción á la GACETA de Madrid y Puerto-Rico.

7.º — Fondo de imprevistos y calamidades públicas.

8.º — Anuncios, impresiones y otros gastos que se consideren necesarios ó convenientes.

9.º — Todos los demás gastos que clara y terminantemente exijan esta y otras leyes en la parte que deban ser cumplidas por la provincia.

Art. 77. Para la aprobación del presupuesto se requiere el voto de la mayoría absoluta del total de Diputados. Si al principio del año económico no estuviere aprobado el presupuesto seguirá rigiendo el anterior en la parte necesaria ó se observará en su caso lo dispuesto en el artículo 73.

Art. 78. Para cubrir los gastos consignados en el presupuesto provincial la Diputación utilizará los recursos que procedan así de rentas y productos de toda clase de bienes, derechos ó capitales que para cualquier concepto pertenezcan á la provincia ó á los establecimientos que de ella dependan como las de las obras públicas, instituciones ó servicios costeados de sus fondos.

Si estos no fueren suficientes la Diputación verificará por el resto un repartimiento entre los pueblos de la provincia en proporción á lo que cada uno pague por contribuciones directas.

Art. 79. Esta cuota será incluida en el presupuesto de cada pueblo y su importe integro ingresará en la Depositaria en la época de la recaudación ordinaria ó antes si voluntariamente lo entregan los Ayuntamientos.

Art. 80. Son aplicables á la Diputación en todo lo que se refiere á la recaudación, administración y custodia de los fondos provinciales las disposiciones contenidas en los artículos 153, 154, 157, 158 y 165 de la Ley municipal.

Art. 81. Formadas y aprobadas las cuentas de cada ejercicio las remitirá la Diputación al Gobernador General para que las dirija al Tribunal de Cuentas del Reino.

TÍTULO III.

DEPENDENCIAS Y RESPONSABILIDAD DE LOS DIPUTADOS Y AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL.

Art. 82. La Diputación provincial y la Comisión obran bajo la inspección y dependencia del Gobierno Supremo y del Gobernador General, y están, por consiguiente, sujetas á la responsabilidad administrativa que proceda en todos los asuntos que no son de su competencia conforme á esta Ley y á las demás generales ó especiales vigentes.

El Gobernador General es el encargado de transmitir á la Diputación y á la Comisión las Leyes, disposiciones é instrucciones que le comuniquen el Ministro de Ultramar en lo que á las mismas fueren convenientes.

Art. 83. — La Diputación provincial incurre en responsabilidad:

1.º — Por infracción manifiesta de la Ley en sus actos ó acuerdos, bien sea atribuyéndose facultades que no le competan, ó abusando de las propias.

2.º — Por desobediencia al Gobierno Supremo ó al Gobernador General en los asuntos en que proceda por delegación y bajo la dependencia de estos.

3.º — Por desacato á la Autoridad.

4.º — Por negligencia ú omisión de que resulte perjuicio en los informes ó servicios que le están encomendados.

Art. 84. La responsabilidad se exigirá administrativa ó judicialmente en su caso, según la naturaleza del acto ú omisión.

La responsabilidad solo será exigida á los Diputados que hubieren incurrido en la omisión ó tomado parte directamente en el acto ó acuerdo que la motive.

Art. 85. La responsabilidad administrativa comprende el apercibimiento, la multa y la suspensión.

Es aplicable á estas penas lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley municipal.

Art. 86. Para la imposición ó exacción de las multas se tendrán presentes las siguientes reglas:

1.º — La declaración de la pena corresponde al Gobernador General, que pirá previamente al Consejo de Administración de la Isla.

2.º — Las multas no excederán de quinientas pesetas.

3.º — Las multas serán satisfechas por los Diputados responsables.

4.º — Son aplicables á estas multas las disposiciones contenidas en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley municipal.

Art. 87. Procede la suspensión en los casos que expresa el artículo 186 de la Ley municipal. Es aplicable á los expedientes de suspensión de los Diputados provinciales lo dispuesto en los artículos 187, 188 y 190 de la Ley municipal.

En el caso de existir responsabilidad criminal, se observará lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley municipal.

Art. 88. La Diputación en cuerpo puede ser suspendida en sus funciones por el Gobernador General por motivo de órden público y en los casos previstos por el artículo 7.º de esta Ley, dando cuenta con urgencia al Ministro de Ultramar y con el oportuno expediente.

En su vista, previa audiencia del Consejo de Estado y con acuerdo del de Ministros, podrá ser declarada disuelta la Diputación y acordarse las demás disposiciones que procedan. Si resultare responsabilidad criminal contra la misma ó contra uno ó mas de sus individuos, serán sometidos á los Tribunales competentes.

Art. 89. Los Diputados destituidos no pueden ser reelegidos hasta pasados seis años por lo menos, y en el caso de que la sentencia no impusiere pena de inhabilitación por mayor tiempo.

Art. 90. Para los delitos que cometan la Diputación en cuerpo y los Diputados provinciales en el ejercicio de sus funciones, será Juez competente en 1.ª Instancia la Audiencia del territorio, con los recursos al Tribunal Supremo que autoricen las Leyes.

Art. 91. Los empleados y agentes de la Administración provincial, nombrados por la Diputación, están sujetos á su obediencia y son responsables ante ella con arreglo á esta Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

1.ª — Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores relativas al régimen de la provincia de Puerto-Rico, en lo que se opusieren á la presente.

2.ª — El Gobierno dictará con sujeción á esta Ley los Reglamentos necesarios para su ejecución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Se procederá tan pronto como sea posible á la renovación de la Diputación provincial de Puerto-Rico, con arreglo á esta Ley y á la electoral, y dictándose las disposiciones y Reglamentos que fueren necesarios al efecto.

En tanto que no se publique la Ley electoral á que se refiere el artículo 5.º, serán electores los que determina la disposición segunda transitoria de la Ley municipal.

Madrid, 24 de Mayo de 1878. — Aprobado por S. M. — EL DUQUE. — Es copia. — GÁMIR.

LEY MUNICIPAL

ISLA DE PUERTO-RICO.

TÍTULO I.

DE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES Y DE SUS HABITANTES.

CAPÍTULO I.

De los términos municipales y sus alteraciones.

Artículo 1.º Es Municipio la asociación legal de todas las personas que residen en un término municipal.

Su representación legal corresponde al Ayuntamiento.

Art. 2.º Es término municipal el territorio á que se extiende la acción administrativa de un Ayuntamiento.

Son circunstancias precisas en todo término municipal:

1.ª — Que no bajen de 2,000 el número de sus habitantes residentes.

2.ª — Que tenga ó se le pueda señalar un territorio proporcionado á su población.

3.ª — Que pueda sufragar los gastos municipales obligatorios con los recursos que las Leyes autoricen. Pedrán subsistir los actuales términos municipales que tengan Ayuntamiento aún cuando no reúnan la circunstancia prevenida en el número 1.º de este artículo.

Art. 3.º Los términos municipales pueden ser alterados:

1.ª — Por agregación total á uno ó á varios términos colindantes.

2.ª — Por segregación de parte de un término, bien sea para constituir por sí ó con otra ú otras porciones Municipio independiente, ó bien para agregarse á uno ó á varios de los términos colindantes.

Art. 4.º Procede la supresión de un Municipio y su agregación á otro ó á varios de sus colindantes:

1.º — Cuando por carencia de recursos ú otros motivos fundados lo acuerden y soliciten los Ayuntamientos y la mayoría de los vecinos de los Municipios interesados.

2.º — Cuando por ensanche y desarrollo de edificaciones se confundan los cascos de los pueblos, y no sean fácil determinar sus verdaderos límites.

Art. 5.º Procede la segregación de parte de un término para agregarse á otros existentes, cuando lo solicite la mayoría de los vecinos de la porción que haya de segregarse, y pueda tener efecto sin perjudicar los intereses legítimos del resto del Municipio, ni hacerle perder las condiciones expresadas en el art. 2.º

La segregación de parte de un término para constituir uno ó varios municipios independientes por sí ó en unión de otra ú otras porciones de otros términos colindantes, puede hacerse mediante acuerdo y solicitud de la mayoría de los interesados y sin perjudicar intereses legítimos de otros pueblos, siempre que los nuevos términos que hayan de formarse reúnan las condiciones expresadas en el art. 2.º

Art. 6.º En cualquiera de los casos de agregación ó segregación, los interesados señalarán las nuevas demarcaciones de terrenos y practicarán la división de bienes, aprovechamientos, usos públicos y créditos, sin perjuicio de los derechos de propiedad y servidumbres públicas y privadas existentes.

Art. 7.º El Gobernador General de la Isla resolverá los expedientes sobre creación, segregación y supresión de Municipios y términos, previo informe de la Diputación provincial.

El acuerdo del Gobernador General será ejecutivo cuando fuere conforme con el dictamen de la Diputación provincial.

En caso de disidencia se elevará el expediente al Ministerio de Ultramar, que resolverá previa consulta del Consejo de Estado.

Art. 8.º Todo término municipal forma parte de un partido judicial de la provincia y no podrá pertenecer, bajo ningún concepto, á distintas jurisdicciones de un mismo órden.

Art. 9.º Para hacer pasar un término municipal de uno á otro partido se instruirá expediente oyendo á los Ayuntamientos del pueblo y de las cabezas de partidos y á la Diputación provincial.

El Gobernador General remitirá el expediente con su informe al Ministerio de Ultramar, que resolverá con audiencia del Consejo de Estado.

Art. 10. Los grupos de población, aunque tengan Ayuntamiento propio situados á una distancia máxima de cinco kilómetros del término de la Capital de la Isla ó de cualquiera otra población, que cuente igual ó mayor número de habitantes, podrán ser agregados á dichos términos en virtud de Real Decreto, previa consulta del Consejo de Estado.

CAPÍTULO II.

De los habitantes de los términos municipales.

Art. 11. Los habitantes de un término municipal se dividen en:

- residentes y
- transeúntes.

Los residentes se subdividen en:

- vecinos y
- domiciliados.

Art. 12. Es vecino todo español emancipado que reside habitualmente en un término municipal y se halla inscrito con tal carácter en el padron del pueblo.

Es domiciliado todo español que sin estar emancipado reside habitualmente en el término, formando parte de la casa ó familia de un vecino.

Es transeúnte todo el que, no estando comprendido en los párrafos anteriores, se encuentra en el término accidentalmente.

Art. 13. Todo español ha de constar empadronado como vecino ó domiciliado en algun Municipio.

El que tuviere residencia alternativa en varios, optará por la vecindad en uno de ellos.

Nadie puede ser vecino de mas de un pueblo; si alguno se hallase inscrito en el padron de dos ó mas pueblos, se estimará como válida la vecindad últimamente declarada, quedando desde entonces anuladas las anteriores.

Art. 14. La cualidad de vecino es declarada de oficio ó á instancia de parte por el Ayuntamiento respectivo.

Art. 15. El Ayuntamiento declarará de oficio vecino á todo español emancipado que en la época de formarse ó rectificarse el padron lleve dos años de residencia fija en el término municipal.

También hará igual declaración respecto á los que en las mismas épocas ejerzan cargos públicos que exijan residencia fija en el término, aun cuando no hayan completado los dos años.

Art. 16. El Ayuntamiento, en cualquier época del año, declarará vecino á todo el que lo solicite, sin que por ello quede exauto de satisfacer las cargas municipales que le correspondan hasta aquella fecha en el pueblo de su anterior residencia.

El solicitante ha de probar que lleva en el término una residencia efectiva continuada de seis meses á lo menos.

CAPÍTULO III.

Del empadronamiento.

Art. 17. Es obligación de los Ayuntamientos formar el padron de todos los habitantes existentes en su término, con expresión de su calidad de vecinos, domiciliados y transeúntes, nombre, edad, estado, profesión, residencia y demás circunstancias que la estadística exija y el Gobierno determine.

Art. 18. Cada cinco años se hará un nuevo empadronamiento; el cual será rectificado todos los años intermedios, con las inscripciones de oficio ó á instancia de parte, y las eliminaciones por